

Economía política en la democracia ecuatoriana (*)

Oswaldo Hurtado

Resumen

Al notable crecimiento de la economía en los años setenta del siglo XX siguieron dos décadas perdidas y luego un nuevo florecimiento en el siglo XXI, especialmente durante el primer lustro. Los volátiles precios del petróleo provocaron crisis económicas corregidas con programas de ajuste, que no fueron acompañados de reformas estructurales que permitieran modernizar la economía. Hubo, sin embargo, un consenso implícito de que sin una activa intervención del sector privado no era posible que la economía creciera suficiente y sostenidamente. El Gobierno del Presidente Correa ha optado por un camino distinto al resucitar una política económica que atribuye al Estado dicha responsabilidad, predicada por la Cepal cuarenta años atrás y ejecutada por los gobiernos militares unos años después.

Dos décadas perdidas

El presente período democrático se inició al mismo tiempo que concluía el más importante proceso de crecimiento económico y progreso social que el Ecuador había experimentado en su historia republicana. Entre 1970 y 1979, gracias a la producción y exportación de petróleo, y a su alto precio, la economía ecuatoriana creció a la sorprendente tasa anual del 8.1%. Tan inusitado crecimiento permitió que se ampliaran los servicios de infraestructura, educación y salud, aparecieran nuevas oportunidades de empleo, mejoraran los ingresos de los individuos, se redujera la pobreza, se conformara una embrionaria clase media y apareciera una desconocida movilidad social. El país se urbanizó, la vieja sociedad rural perdió preeminencia y las actividades productivas urbanas (industria, comercio, finanzas y servicios) superaron a las rurales. Un país que se encontraba entre los más atrasados de América Latina pasó a ocupar un lugar intermedio.

En los años ochenta y noventa, problemas endógenos y exógenos conspiraron contra el buen desempeño económico de la democracia inaugurada el año 1979, la cual, a diferencia de las dictaduras que le antecedieron, debió lidiar con una persistente escasez de recursos y periódicas crisis económicas. La impredecible economía internacional, redujo la demanda y el valor de las exportaciones y limitó y encareció el crédito externo. La crisis de la deuda (1982) paralizó el crédito proporcionado por la

banca internacional. Los volátiles precios del petróleo, y sus inesperadas caídas, hicieron que el crecimiento económico se volviera aleatorio y el déficit fiscal recurrente. Los conflictos bélicos de los años 1981 y 1995 afectaron las actividades productivas y generaron gastos extraordinarios. Las inundaciones de 1983 y 1998 afectaron la producción agrícola, redujeron las exportaciones y dañaron caminos y puentes. El terremoto del 1987 destruyó un tramo del oleoducto y paralizó las exportaciones de petróleo por varios meses. Las sequías elevaron los precios de los alimentos y ocasionaron desabastecimientos de energía.

Debido a estas causas, y a motivos políticos, en las dos últimas décadas del siglo XX el crecimiento económico fue anémico. El PIB se incrementó anualmente a un modesto 1.8%, tasa inferior a la del aumento de la población que fue del 2.3%, por lo que entre 1980 y 1999 el producto per cápita se redujo, en precios reales, de 1.420 a 1.180 dólares. Se volvió cotidiana la inestabilidad económica, expresada en altas tasas de devaluación e inflación, llegando esta última al elevado promedio anual del 36.5%. La suma de estancamiento e inestabilidad deterioró los salarios reales, multiplicó el desempleo y el subempleo, agudizó la pobreza -la urbana osciló entre el 40% y el 45%- y empeoró la inequitativa distribución de la riqueza. Los programas sociales que los gobiernos democráticos impulsaron -alfabetización, educación, salud, electrificación rural y subsidios- apenas consiguieron paliar el deterioro de las condiciones de vida de la población.

Estas negativas tendencias económicas y sociales empeoraron hacia fines de siglo, por la drástica caída de los precios del petróleo a menos de 10 dólares, las inundaciones causadas por el Niño y la destrucción de la producción camaronera por la plaga de la mancha blanca, hechos que sumados a una inadecuada supervisión bancaria y a errores y omisiones del gobierno del presidente Jamil Mahuad, llevaron a la insolvencia a una docena de bancos y a un número algo menor de instituciones financieras. De manera que al finalizar el siglo XX, casi todos los indicadores económicos y sociales eran negativos y conformaban un cuadro desolador que el país no había conocido desde la depresión de los lejanos años treinta.

Los sectores público y privado se encontraban en insolvencia, el PIB se redujo en 75.3%, había quebrado el 70% del sistema financiero, las empresas perdían hasta el 50% de su patrimonio, la tasa de inflación se acercaba a los tres dígitos, los salarios reales se depreciaban en 11%, la pobreza urbana ascendía al 46%, se había producido una devaluación anual del 174%, el déficit del sector público no financiero ascendía al 4% del PIB, un número elevado de ecuatorianos perdían sus depósitos bancarios, atemorizados capitales fugaban al exterior y se empobrecían los sectores populares y medios por el desempleo, hechos que provocaron una masiva emigración a Estados Unidos, España y otros países.

Sin embargo en este período algunos progresos se dieron. Se gestaron nuevos productos de exportación, entre los que destacaron los camarones y las flores; la Sierra,

luego de casi trescientos años, volvió a ser una región exportadora; se constituyó el Servicio de Rentas Internas (SRI) y con él crecieron sustancialmente las recaudaciones tributarias; mejoró la escolaridad, se redujo el analfabetismo al 8% y la esperanza de vida de los ecuatorianos se acercó a los 70 años; el pueblo indio se alfabetizó, accedió a la educación, recuperó su dignidad y sus líderes accedieron a importantes funciones públicas; en escuelas, colegios y universidades el número de mujeres se equiparó al de los hombres y fue resuelto el problema territorial con el Perú que tanto había conspirado contra el desarrollo nacional.

Ingredientes políticos de las crisis económicas

Con una excepción, los gobiernos democráticos no enfrentaron estas adversidades, lo hicieron de manera insatisfactoria o no perseveraron en el camino emprendido, por lo que no fue posible corregir los desequilibrios, restablecer la estabilidad económica y reanudar el crecimiento. El programa de ajuste que se ejecutó en el gobierno del presidente Osvaldo Hurtado, fue abandonado unos meses después de inaugurado el mandato del presidente León Febres Cordero. Algo parecido ocurrió con el exitoso ajuste realizado por el presidente Sixto Durán Ballén en los dos primeros años de su administración. Por este motivo, en los veinte años analizados (1980-1999), el Ecuador vivió inmerso en el pernicioso círculo vicioso crisis-ajuste, recuperación-crisis, que le hizo perder las oportunidades ofrecidas por la versátil economía nacional y en ciertos momentos por la economía internacional. Las crisis habitualmente se generaron en los desbalances del sector fiscal y del sector externo, que en algunos gobiernos alcanzaron niveles críticos.

Tres factores contribuyeron a que ello ocurriera, además de catástrofes y embates externos antes señalados. Influyentes sectores políticos y sociales menospreciaron la estabilidad, el crecimiento y el orden de las finanzas públicas, y combatieron los programas de ajuste que se hicieron para alcanzarlos. Los habituales desbordes populistas del Congreso Nacional y de algunos gobiernos, multiplicaron de manera incontrolada el gasto público y empeoraron el crónico déficit de la caja fiscal, como ocurrió en la segunda mitad del gobierno del presidente Febres Cordero y en los de Abdalá Bucaram y Fabián Alarcón. La inestabilidad política acompañó a la inestabilidad económica, expresada en la duración de pocos meses en el cargo de ministros de finanzas y petróleo, y en el hecho de que los presidentes Bucaram, Alarcón y Mahuad, sumados, gobernaran menos de cuatro años de gobierno.

Como no fue posible que la sanidad fiscal, una baja inflación, la estabilidad cambiaria y el crecimiento económico se convirtieran en políticas de Estado, esto, es en una practica común a todos los gobiernos, cualquiera fuera su ideología y orientación política, el Ecuador no pudo llenar un requisito en el que se ha sustentado el desarrollo de los países que salieron del atraso y mejoraron el bienestar de sus pueblos en la segunda mitad del siglo XX. Falencia que, además, impidió que las políticas sociales

produjeran los efectos deseados, pues buena parte de lo que los sectores de menores ingresos recibían a través de la educación, la salud, los subsidios y otros beneficios, lo perdían durante las crisis económicas, por la inflación, el desempleo, el deterioro de los salarios reales y el aumento del número de pobres. Debido a estas razones, los resultados sociales del gobierno del “neoliberal” presidente Sixto Durán fueron mejores que los del “socialista” presidente Rodrigo Borja.

Parecidas razones políticas impidieron que se hicieran las reformas estructurales que las realidades económicas nacionales e internacionales planteaban al Ecuador. Los escasos recursos financieros disponibles tornaban indispensable la participación del capital extranjero, para que pudiera incrementarse la producción petrolera, construirse centrales hidroeléctricas y mejorar caminos, comunicaciones, puertos y aeropuertos. A lo que se sumaba que el Estado no estaba en condiciones de asumir tales responsabilidades, por la corrupción, ineficacia, politización y burocratismo de las empresas públicas. Para que los citados sectores comprendieran que el mundo de fin de siglo no era el de mediados del siglo XX, ni siquiera les valió el colapso de las economías socialistas y el éxito de los países que adoptaron la economía de mercado, incentivaron la inversión extranjera y se abrieron a la competencia internacional. A pesar de estas evidencias, continuaron pensando y actuando como si nada hubiera ocurrido. Se opusieron a que se realizaran las reformas que el país necesitaba para que la economía fuera puesta al día y pudiera intervenir solventemente en la competitiva economía internacional. En consultas populares, en el Congreso Nacional y mediante acciones de fuerza impidieron que se redujera el tamaño de sectores estatales improductivos y se ampliara la participación del sector privado.

El próspero siglo XXI

En razón de la gravedad de la crisis, de la fragilidad política del gobierno del presidente Mahuad y de la débil institucionalidad de la democracia ecuatoriana, se creía que el país demoraría mucho tiempo en conjurarla y en superar la hecatombe económica vivida. Nadie esperó que en un plazo relativamente breve pudieran restablecerse los equilibrios macroeconómicos y recuperarse el crecimiento, como en efecto ocurrió entre los años 2.000 y 2.001. Menos aún, que se iniciaría una década de prosperidad económica y progreso social que el Ecuador no había experimentado desde los años setenta del siglo pasado.

En efecto, entre los años 2000 y 2005 la economía creció a la alta tasa anual de 5.4%, el sistema financiero recobró su solvencia, la inflación se redujo a un dígito, la pobreza urbana cayó al 25%, y los salarios reales aumentaron en un 78% con relación a los del año 1999. El déficit fiscal fue controlado, la carga de la deuda pública dejó de ser un problema para la economía, crecieron las recaudaciones tributarias por el eficaz trabajo del eficiente SRI, se recuperó el gasto social y se produjo una leve mejoría en la distribución del ingreso.

Además se aceleraron positivos procesos económicos y sociales que venían gestándose desde años atrás. Las mujeres cambiaron sus vidas con su ingreso masivo a la educación, al mercado de trabajo, a los negocios, al arte y a la literatura. La difusión de la telefonía celular entre los pobres les permitió ampliar sus negocios y servicios, elevar la productividad y mejorar los ingresos. El notable progreso de Quito atrajo una importante emigración costeña, por primera vez en centenares de años; Guayaquil abandonó el marasmo en que se sumió por décadas, se modernizó y surgieron nuevos polos de desarrollo en Cuenca, Ambato y Manta. Finalmente, una intensa movilidad social permitió a centenares de miles de ecuatorianos salir de la marginalidad absoluta, ascender a la clase popular, de esta a la media y muchos a la media alta.

En el logro de estos resultados dos factores tuvieron un papel destacado: la decisión del presidente Maguad de sustituir el sucre por el dólar como moneda nacional (9 de enero de 2000) y el retorno del petróleo al papel de motor de la economía nacional. Gracias a la dolarización pudo detenerse, y abatirse, la estampida inflacionaria y devaluatoria y crearse condiciones para que se recuperaran los salarios reales y el empresariado pudiera contar con un escenario económico predecible. No sólo que mejoró ostensiblemente el precio del petróleo, que llegó a superar los 40 dólares el barril, sino que, además, aumentó el volumen de sus exportaciones, impulsadas por las inversiones realizadas por compañías extranjeras privadas en su producción y en la construcción de un oleoducto de crudos pesados (OCP), para su transporte al puerto de embarque en Esmeraldas.

También contribuyeron las cuantiosas remesas enviadas por los emigrantes, que llegaron a ser más elevadas que los ingresos generados por las ventas externas de banano; las mayores exportaciones de este y otros productos debido al auge de la economía internacional impulsado por Estados Unidos y China; los programas de ajuste económico realizados por los presidentes Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez; las crecientes recaudaciones fiscales y el acceso del país al crédito externo gracias a la renegociación de la deuda.

A fines del año 2005 estaban dadas las condiciones para que la economía pudiera crecer a una tasa mayor que bien podía alcanzar el 8%. Para lograrlo era necesario consolidar la estabilidad alcanzada, añadir nuevas reformas a las pocas que se habían hecho a fin de dinamizar la economía, aprovechar las favorables condiciones internacionales para atraer capitales que incrementaran la producción petrolera y expandir las otras exportaciones mediante una calculada apertura económica. Tan promisorio proceso, que hubiera permitido que la economía ecuatoriana emprendiera un desarrollo en el largo plazo, se interrumpió con el derrocamiento del presidente Gutiérrez.

El gobierno de su sucesor, el vicepresidente Alfredo Palacio, dejó de lado las constructivas relaciones que el Estado mantenía con las empresas petroleras

extranjeras, al estatizar sin indemnización los campos de la compañía estadounidense Oxy, abolir las normas que promovían el orden de las finanzas públicas y limitaban el crecimiento desmesurado del gasto, eliminar los fondos de ahorro petrolero que protegían a la economía frente a imprevistas contingencias y cancelar la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que el Ecuador discutía con los Estados Unidos.

Estas líneas de política económica, inspiradas por el ministro de Finanzas Rafael Correa, fueron profundizadas al asumir la presidencia de la República luego de ganar las elecciones de 2006. Aumentó la participación del Estado en la explotación de petróleo y redujo la de las empresas extranjeras; expandió el ineficiente y oneroso sector empresarial público; multiplicó, regulaciones, controles y subsidios que afectaron la acción del mercado; sembró temor en los empresarios nacionales y extranjeros con la consiguiente caída de sus inversiones; elevó drásticamente el gasto público que ha llegado a representar el 40% del PIB; gastó los fondos de ahorro petrolero que tan útiles le habrían sido para sortear la crisis internacional del año 2009; se retiró de la negociación del TLC con Europa que los países andinos realizaban conjuntamente; anuló los tratados bilaterales que protegían las inversiones extranjeras; empeoró la seguridad jurídica al relajar el imperio de la ley; aisló al Ecuador del mundo financiero internacional con la declaración de la ilegitimidad de la deuda externa y cortó los tradicionales vínculos financieros que el país había mantenido con el Banco Mundial y el FMI, instituciones multilaterales de cooperación que habrían podido prestar al Gobierno, a bajas tasas de interés, los capitales que hoy tanta falta le hacen.

Transcurridos cuatro años para los que inicialmente fue elegido el presidente Correa, los resultados económicos y sociales que exhibe son inferiores a los que obtuvieron sus predecesores, los presidentes Noboa y Gutiérrez. A pesar de que la economía se ha beneficiado de los altos precios del petróleo, que entre 2007 y 2010 han bordeado los 70 dólares por barril, y de una depreciación del dólar que ha alentado las exportaciones no petroleras, factores han compensado largamente lo que el país perdió por la crisis financiera internacional del año 2009.

El crecimiento anual de la economía ha sido de sólo el 3.3% y el excesivo gasto público, además de disparar las importaciones generando un alto déficit comercial, ha incrementado la vulnerabilidad de la economía frente a eventuales caídas del precio del petróleo. No ha caído el desempleo (7.4% en 2010) ni ha disminuido el subempleo (49.6% en 2010) y ha vuelto a subir la pobreza urbana (25.5% en 2009), que venía disminuyendo sostenidamente desde el año 2001. Según la Cepal, la pobreza urbana en Ecuador subió un punto con relación a 2008 y el país figura en el grupo de los de menor gasto social en América Latina, por habitante y en relación al PIB.

Los modelos de desarrollo

En los primeros años de la segunda mitad del siglo XX, la Cepal sustentó la tesis de que los países de América Latina, para salir del atraso y progresar, debían definir un

modelo económico autóctono, distinto del que orientó el desarrollo de América del Norte, Europa Occidental y Japón. Consideró que el modelo de mercado que siguieron los países desarrollados de entonces no era replicable, en razón de las particulares características de América Latina y de las asimétricas relaciones económicas internacionales existentes.

La Cepal resumió su propuesta en los siguientes términos. Fortalecer los sistemas de planificación a fin de que el Estado asuma un papel determinante en el crecimiento económico y en el mejoramiento del bienestar. Impulsar un crecimiento “hacia adentro” privilegiando el mercado interno y un mercado integrado de América Latina, a fin de romper la dependencia que ataba la región a las economías centrales. Proteger la producción nacional de la competencia extranjera mediante subsidios, créditos privilegiados, restricciones arancelarias y prohibiciones de importar, para así sustituir importaciones y conformar un sector industrial nativo. Regular la inversión foránea a fin de evitar que la economía se desnacionalice y los recursos naturales y los servicios públicos sean explotados en contra del interés nacional. Cambiar las injustas estructuras económicas y sociales existentes mediante reformas de estructuras y procesos redistributivos de la riqueza. Fortalecer la interlocución de la región frente a los países desarrollados, especialmente con los Estados Unidos, a través de una presencia conjunta de los estados latinoamericanos representados por sus organismos regionales.

El modelo de desarrollo ejecutado por las dictaduras que gobernaron el Ecuador en los años setenta del siglo pasado siguió estos lineamientos, por entonces compartidos por los influyentes círculos técnicos de la Junta de Planificación y del Banco Central, instituciones que mucho contaban en el diseño y aplicación de las políticas públicas. El pensamiento de la Cepal encontró en el país un terreno propicio para fructificar, en razón de los vastos recursos generados por la riqueza petrolera, que fortalecieron la caja fiscal e hicieron menos necesaria la inversión privada nacional y extranjera. Fue así como el Estado tomó bajo su responsabilidad la conformación de una industria nacional que surtiera el mercado interno, la ejecución de una reforma agraria que distribuyera la tierra entre los campesinos y la prestación de servicios de comunicaciones, electricidad, puertos, aeropuertos, caminos, transporte aéreo y marítimo, así como la explotación del petróleo. Para el efecto se crearon corporaciones estatales entre las que se destacaron Cepe e Inecel.

El primer gobierno democrático, presidido por Jaime Roldós, hizo suya la política económica de los gobiernos militares, expresada en el Plan de Desarrollo elaborado por el Conade dirigido por el vicepresidente Osvaldo Hurtado. Cuando asumió la presidencia el año 1981, debió concentrar su atención en la ejecución de un drástico programa de austeridad, con el que buscó corregir los abultados déficit producidos en las cuentas fiscales y en la cuenta corriente balanza de pagos, causados por la elevada deuda externa, las altas tasas de interés, el cierre del crédito bancario internacional y los gastos y pérdidas dejados por las inundaciones y el conflicto fronterizo con el Perú. Con

este fin, redujo el gasto público, elevó el precio de los combustibles, devaluó la moneda, flexibilizó el tipo de cambio, reajusto el precio de bienes de consumo, eliminó subsidios, renegoció la deuda externa, aumentó aranceles, prohibió la importación de artículos suntuarios, elevó la tasa de interés e incrementó tarifas de los servicios públicos.

La inestabilidad que ha acompañado a la democracia ecuatoriana, la inexistencia de consensos económicos básicos, el populismo reinante y shocks internos y externos, impidieron que se mantuvieran los equilibrios macroeconómicos, por lo que los gobiernos siguientes, unos más otros menos, cuanto tuvieron que enfrentar crisis económicas causadas por los mencionados déficit, adoptaron similares programas de austeridad. Una excepción fueron los presidentes Palacio y Correa, debido a que los altos precios del petróleo y la baja carga de la deuda permitieron que dispusiera de recursos suficientes para financiar el presupuesto del Estado y garantizar la solvencia de la balanza de pagos.

Algunas de las medidas de ajuste, antes citadas, fueron recomendadas por las organizaciones multilaterales de crédito y posteriormente integradas al Consenso de Washington (1990), junto a las llamadas reformas estructurales que a continuación se citan. Gasto público que favorezca la distribución del ingreso y actividades de alta rentabilidad, reforma fiscal con moderadas tasas impositivas que amplíe la base tributaria, liberalización de los mercados financieros, tasas de cambio competitivas, disminución del proteccionismo y aliento de la competencia externa, apertura a la inversión extranjera directa, transferencia al sector privado de empresas y servicios públicos, reducción de controles para favorecer la acción del mercado y protección de los derechos de propiedad.

Ningún gobierno ecuatoriano del presente período democrático ejecutó estas medidas en su totalidad y algunas fueron aplicadas parcialmente o desvirtuadas durante su ejecución y al discutirse en el Congreso Nacional. Por este motivo, carece de sustento la afirmación, tan repetida, de que a lo largo de veinte y seis años los gobiernos ejecutaron una política económica neoliberal.

El presidente Febres Cordero sólo liberó la tasa de interés de determinadas operaciones de crédito, levantó los controles de precios de ciertos productos y otorgó garantías a las inversiones provenientes de los Estados Unidos. El presidente Rodrigo Borja sólo flexibilizó el mercado laboral, autorizó el trabajo a tiempo parcial, limitó la acción sindical de los trabajadores, redujo los aranceles para la importación de ciertos bienes y equiparó la inversión extranjera a la inversión nacional. El presidente Durán Ballén fue algo más lejos, al liberalizar todas las tasas de interés, eliminar los controles a los márgenes en la intermediación financiera, disponer que las operaciones comerciales se realicen en el mercado libre de cambios, incorporar el país a la Organización Mundial del Comercio, facilitar la inversión extranjera en todas las actividades productivas y simplificar y reducir el encaje bancario. Además consiguió privatizar tres empresas de poca significación económica: el ingenio Aztra y la de fertilizantes Fertiza y de cemento

Selva Alegre. El presidente Gustavo Noboa autorizó a un consorcio extranjero la construcción del oleoducto de ciertos pesados, necesidad apremiante postergada por anteriores gobiernos, y promovió la expedición de la Ley de Responsabilidad Fiscal para ordenar las finanzas públicas, además de constituir un Fondo de ahorro petrolero (Feirep) para garantizar la sustentabilidad de las finanzas públicas. Allí terminaron las medidas “neoliberales”, pues los siguientes presidentes - Bucaram, Mahuad, Gutiérrez y Palacio- no tomaron ninguna medida de ese tipo.

Sin embargo, a pesar de sus diferencias, los gobiernos del presente período democrático coincidieron en la conveniencia de apoyar las iniciativas empresariales privadas y de no ampliar el sector estatal. Esta política, que implícitamente compartieron, fue quebrada por el presidente Palacio y cambió radicalmente en la administración del presidente Correa, al minimizarse el papel del sector privado en el crecimiento de la economía y magnificarse la responsabilidad del Estado. Un modelo de esta naturaleza no entraña ninguna novedad, pues reproduce la política económica de los gobiernos militares anteriores a la democracia y resucita un pensamiento que la misma Cepal ha olvidado.

Los modestos resultados económicos y sociales obtenidos en el gobierno del presidente Correa, confirman lo ocurrido en otros países de América Latina y del mundo que aplicaron dicho modelo. Abundan las evidencias de que sin un crecimiento económico suficiente, sostenido y de largo plazo, no es posible que un país abandone el atraso, reduzca la pobreza, mejore el bienestar y finalmente se desarrolle. Como también que sin este requisito las políticas sociales no producen los resultados esperados. Aquí radica la explicación de que las economías de Perú y Colombia crezcan raudamente y vaya progresivamente distanciándose de la economía ecuatoriana. Por estos motivos el modelo que sigue el Gobierno ha sido abandonado, incluso por los países que, luego de la revolución soviética, perseveraron por décadas en el empeño de encontrar una alternativa a la economía de mercado.

(*) Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Economía y Finanzas realizado en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) entre el 17 y 18 de enero de 2011.

Bibliografía

- Cepal, El pensamiento de la Cepal, Ed. Universitaria, Santiago, 1969.
- Hurtado Osvaldo
- Deuda y desarrollo en el Ecuador contemporáneo, Planeta, Quito, 2002
- Neoliberalismo y economía social de mercado, Cordes, Quito, 2005
- Los costos del populismo, Cordes, Quito, 2006
- Los últimos treinta y tres años en: El poder político en el Ecuador, Planeta, Quito, 2010

Gráficos



